



ACTOR: [REDACTED].

DEMANDADAS: SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

SECRETARÍA DEL TRANSPORTE.

TODAS DEPENDIENTES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO.

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA, JALISCO.

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.

SECRETARIO: JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA
CASILLAS.

Guadalajara, Jalisco, 31 treinta y uno de mayo de 2021 dos mil veintiuno.

V I S T O S para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, TODAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**, así como de la **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, y;

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 12 doce de enero de 2021 dos mil veintiuno, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED] por su propio derecho interpuso Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de fecha 26 veintiséis de febrero de 2021 dos mil veintiuno, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Secretaría de la Hacienda

Pública, Secretaría de Seguridad y a la Secretaría del Transporte todas dependientes del Gobierno del Estado de Jalisco, así como de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y como actos administrativos impugnados los siguientes:

- El cobro de Refrendo Anual, Tarjeta de Circulación y Holograma por los periodos de los años **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho, **2019** dos mil diecinueve, **2020** dos mil veinte y **2021** dos mil veintiuno.

- La cédula de notificación de infracción folio [REDACTED]

- La cédula de notificación de infracción folio [REDACTED]

Imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED].

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas, las documentales identificadas con los números 1, 2 y 3, al igual que la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, vertidas con los numerales 4 y 5, de su escrito inicial de demanda, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados y se les declararía por perdido el derecho a rendir pruebas.

Por otro lado, se requirió a las autoridades demandadas descritas con antelación, para que al momento de contestar la demanda exhibieran copias certificadas de los actos combatidos, apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicaría alguna medida de apremio prevista en el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener como ciertas las afirmaciones que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos, salvo disposición en contrario como lo establece el artículo 293 del Código de procedimientos civiles del Estado, de aplicación supletoria, también se habilitaron días y horas inhábiles, a efecto de que se practicaran las notificaciones que derivaran de la tramitación del presente juicio, por ser necesario para su debida substanciación.

3. Con fecha 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda Pública, a la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, así como al Director General Jurídico de la



Secretaría de Seguridad, quienes comparecieron en representación y sustitución de las autoridades demandadas –Secretaría de la Hacienda Pública, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y Secretaría de Seguridad–, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de sus escritos se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, de la primera autoridad referida, la documental marcada con el número 1, al igual que la presuncional legal y humana, ofertadas con los arábigos 3 y 4, respecto de la segunda autoridad en aludida, la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones bajo los rubros 2 y 3, finalmente de la tercer autoridad, la documentales pública marcada con el número 1, al igual que la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, identificadas con los números 3 y 4, además se tomó debida nota de la causal de improcedencia vertida por el representante de la autoridad demandada– Secretaría de la Hacienda Pública-, con las copias simples de los escritos de contestación de demanda, se ordenó correr traslado a la parte actora para que quedara debidamente enterada de sus contenidos.

Por otra parte, se dio cuenta que la diversa autoridad demandada —Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco—, fue omisa en producir contestación a la demanda instaurada en su contra, no obstante, de haber sido debidamente notificada y emplazada, motivo por el cual se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de admisión, esto es se le declaró la correspondiente rebeldía y se le tuvieron por ciertos los hechos que se le imputan, salvo que por pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados.

Además, se advirtió que las autoridades demandadas, fueron omisas en cumplir con el requerimiento formulado en auto de 26 veintiséis de febrero de 2021 dos mil veintiuno, motivo por el cual se les hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido y se les tuvieron por ciertos lo hechos que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos, salvo disposición en contrario.

En virtud de lo anterior y de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, además de que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan **alegatos**, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

4. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia, se les hacen efectivos los apercibimientos ahí contenidos y se les **declaro** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los

autos para que se dicte la Sentencia Definitiva que en derecho corresponda, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5, 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 28 y 32, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48¹, 57² y 58³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399⁴ y 400⁵ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjética de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer la accionante en su escrito inicial de demanda, ni la contestación realizada por los representantes de las autoridades demandadas, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y

¹ Artículo 48. *En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.*

Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

² Artículo 57. *El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.*

³ Artículo 58. *La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.*

⁴ Artículo 399.- *Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.*

⁵ Artículo 400.- *Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.*



EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. *De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.*

IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudia la causal de improcedencia, promovida por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quien compareció en Representación de la autoridad demandada –Secretaria de la Hacienda Pública–, en su escrito de contestación a la demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 14 catorce de abril de 2021 dos mil veintiuno veinte (fojas 39 a 59), prevista por el artículo 29 fracción IX, en relación con el 30 fracción I⁶ y artículo 1 párrafo segundo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que literalmente establecen:

“Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

⁶ Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley.”

Manifiesta la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, que el juicio de nulidad no es la vía idónea para combatir el pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, por ser una disposición de orden público e interés social, emanada del Congreso, (Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, de los Ejercicios Fiscales 2017 dos mil diecisiete al 2021 dos mil veintiuno), ya que en el caso concreto está sirve para el cobro de los derechos de refrendo, de ahí que se configure la causal de improcedencia.

La causal de improcedencia se juzga infundada.

Lo antes referido es así, en razón de que la parte actora exhibió la impresión de adeudo vehicular, para acreditar la existencia de los actos impugnados; es decir, los actos atribuidos a la citada Secretaría, para tal efecto se cita el texto del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.

*Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. **En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación**, ante las salas del Tribunal de lo Administrativo...”*

En ese orden de ideas, como se advierte del numeral transcrito, el juicio en materia administrativa, resulta procedente, cuando se combatan normas generales, siempre y cuando no sean Leyes emanadas del Congreso y deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, siendo que la parte actora, precisó como actos administrativos impugnados, el refrendo anual de placas vehiculares de los años 2017 dos mil diecisiete al 2021 dos mil veintiuno; contribución que se encuentra prevista en los artículos 24 y 23 en sus fracciones III y III bis de las Leyes de Ingresos respectivas; mismas que son normas de carácter general y en el



caso particular es procedente el juicio de nulidad contra dichos actos, ya que el actor con el adeudo vehicular, acreditó estar en la hipótesis de aplicación, por lo que sitúa en el supuesto señalado en el presente párrafo.

V. Resultan **parcialmente procedentes** los conceptos de impugnación expresado por [REDACTED], contenidos en su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por las fracciones II y IV de los artículos 74⁷ y 75⁸ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar la nulidad** de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], así como de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED].

Asimismo, **se reconoce la validez** del refrendo anual de placas vehiculares de los ejercicios fiscales **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho, **2019** dos mil diecinueve, **2020** dos mil veinte y **2021** dos mil veintiuno, imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED].

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y más benéfica para el accionante, atento al citado dispositivo legal, así como a la tesis que aquí se inserta:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a

⁷Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

I. Reconocer la validez de la resolución o del acto impugnado
II. Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

⁸ “Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

I.
II.
III.

IV. La omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el acto, cuando afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución o acto impugnado;

declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos." Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis de del primer concepto de impugnación que vierte en su escrito de inicial de demanda, en el cual en primer término substancialmente refiere que, las cédulas notificación de infracción impugnadas, carecen de una debida notificación fundamentada en el artículo 13 fracción VI, de la Ley del Procedimiento Administrativo, además agrega que respecto del refrendo anual de placas vehiculares, asevera que incumple con el principio de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, prevé cuotas distintas por servicios análogos, por lo que considera que deberá declararse la nulidad de los actos materia de la controversia, en base a la tesis que invoca.

Al manifestase a lo anterior, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada – Secretaría de la Hacienda Pública del Estado-, en su escrito de contestación de demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el 14 catorce de abril de 2021 dos mil veintiuno (fojas 39 a 59), manifiesta que resulta infundado e inoperante los argumentos vertidos por el accionante, toda vez que referente al refrendo de los años 2017 a 2021, no se trata de una misma prestación de servicio y por ende no se cobra una tarifa igual, pues la actividad técnica especializada que despliega el Estado no es la misma.

Asimismo, la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, quien compareció en representación y sustitución de la diversa autoridad demandada — Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara— en su escrito de contestación de demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el 14 catorce de abril de 2021 dos mil veintiuno (fojas 61 y 62), aduce que las cédulas controvertidas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, asimismo se cumple con los requisitos de



validez, puesto que de manera clara y precisa se señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como señalar el motivo de la sanción, “omitir tarifa” prevista en la fracción I del artículo 73 del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara, de ahí que dichos actos se ajustan a lo previsto en los numerales 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Por otro lado, el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada –Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco-, en su escrito de contestación de demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el 14 catorce de abril de 2021 dos mil veintiuno (fojas 64 a 70), refiere que lo argumentado por su contraparte es improcedente, dado que los actos impugnados cumplen con todos y cada uno de los requisitos de validez establecidos por los numerales 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, es decir el procedimiento a seguir cuando el exceso de velocidad es captado por un medio electrónico, así como efectuar la notificación del mismo, lo establece el numeral 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Sin que al efecto la diversa autoridad demandada —Secretaría del Transporte—, hiciera pronunciamiento alguno referente a los conceptos de impugnación por parte de la actora, toda vez que en actuación de fecha 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno, se le declaró la correspondiente rebeldía.

Derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera **fundado** lo alegado por el accionante, cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron debidamente notificadas, no obstante que las autoridades demandadas -Secretaría del Transporte, Secretaría de Seguridad, ambas dependientes del Gobierno de Estado de Jalisco, así como de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco-, se encuentran obligadas a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377⁹, así como por la fracción III, del artículo 378¹⁰ del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que

⁹ Artículo 377. En el caso del conductor que habiendo cometido alguna de las infracciones previstas por la Ley o el Reglamento, no se encuentre en el lugar del vehículo, el Policía Vial Estatal o Policía de Tránsito Municipal procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente, la que dejará en lugar visible y seguro del automotor.

¹⁰ Artículo 378. Las infracciones a la Ley o a este Reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en cédula de notificación de infracción, en los términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se verificarán las siguientes acciones:

III. La cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo recibas o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello.

hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello, además el actor refiere que hasta el momento de la presentación de la demanda desconoce su contenido, tan es así que solicitó se requiriera a las autoridades emisoras para estar en posibilidad de ampliar su demanda; sin embargo en auto de 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno, se dio cuenta que las autoridades demandadas –Secretaría del Transporte, Secretaría de Seguridad, ambas dependientes del Gobierno de Estado de Jalisco, así como de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara-, fueron omisas en exhibir copia certificada de los actos administrativos impugnados y se les tuvieron como ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esas documentales, de ahí resulta claro que ha excedido en demasía el término de los sesenta días naturales que las autoridades demandadas tenían para notificar las cédulas controvertidas; quedando de manifiesto para esta autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], así como de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED] imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED], sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. *La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga*



"se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Octava Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 1992. Tesis: P.LV/92. Página: 34.

La ausencia de notificación personal constituye la omisión de un requisito formal, un vicio que afecta el derecho humano a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, que actualiza el supuesto de nulidad previsto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que en principio conlleva a una declaratoria de nulidad en términos del diverso 76, tercer párrafo, de dicha Ley; sin embargo esta regla admite excepciones atendiendo al tipo y origen de los actos impugnados en el Juicio Administrativo, de este manera, en los casos, cómo el que se analiza debe ser declarada en forma lisa y llana, porque el requisito de la notificación personal al gobernado, dentro de los 60 días siguientes al levantamiento de la infracción, implica que tal situación no podría retrotraerse a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, al que dieron origen al levantamiento de la cédula de notificación de infracción y su consiguiente notificación personal, cuestiones que resultan prácticamente imposibles de repetirse, por lo cual la autoridad está impedida para corregir tales eventualidades.

VI. Por otro lado, **no le asiste la razón** a la parte actora, cuando refiere que el **refrendo anual** de placas vehiculares para los ejercicios fiscales **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho, **2019** dos mil diecinueve, **2020** dos mil veinte y **2021** dos mil veintiuno, violenta el principio de proporcionalidad y equidad en materia tributaria, como se analizará en párrafos precedentes.

Se estima necesario ilustrar que, como contribuciones, los derechos se encuentran sujetos a los principios constitucionales en materia fiscal, inmersos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ...

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

En materia de los derechos por servicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en vista del respeto a los principios constitucionales en materia fiscal de equidad y proporcionalidad tributaria, para fijar el monto de tales derechos, debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Se invoca la jurisprudencia siguiente:

“DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. *Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos".(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Jurisprudencia 196934, Página: 41.)*



Es preciso puntualizar que la proporcionalidad en las contribuciones establecidas por un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende no como el costo exacto o aproximado, a una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado, sino en función de la interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa.

En ese sentido los artículos 23 y 24 fracción III y fracción III bis, de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco, para los referidos ejercicios fiscales, establecen:

"LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DOS MIL DIECISIETE.

Artículo 24.- Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

...

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:

- | | |
|--|-------------------|
| <i>a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques:</i> | <i>\$507.00</i> |
| <i>b) Motocicletas:</i> | <i>\$117.00</i> |
| <i>c) Placas de Demostración:</i> | <i>\$1,229.00</i> |

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

Artículo 23.- Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:

- a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques: \$522.00
- b) *Motocicletas:* \$120.00
- c) *Placas de Demostración:* \$1,266.00

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

Artículo 23.- Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:

- a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques: \$590.00
- b) *Motocicletas:* \$168.00
- c) *Placas de Demostración:* \$1,431.00

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 DOS MIL VEINTE.

Artículo 23.- *Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

III. Por refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:

- a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques *servicio particular y público:* -----
-----\$649.00
- c) *Placas de Demostración:* -----\$1,574.00



Tratándose de calcomanía de identificación vehicular sus características deberán de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016.

III bis. *Por refrendo anual de motocicletas -----\$260.00*

El refrendo anual para motocicletas sólo incluye la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular.

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO.

Artículo 23.- *Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

III. *Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:*

a) *Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público: ----
-----\$688.00*

c) *Placas de Demostración: -----\$1,668.00*

III bis. *Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación en papel para motocicletas -----\$276.00*

De lo anterior, queda de manifiesto que el artículo 24 fracción III para el ejercicio fiscal **2017** dos mil diecisiete, al igual que del numeral 23, fracción III y III bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales **2019** dos mil diecinueve, **2020** dos mil veinte y **2021** dos mil veintiuno, no violentan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV¹¹, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por el servicio de refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, servicio particular y público, así como motocicletas y autos eléctricos, se establecen tarifas diferentes atendiendo al tipo de vehículo; Sin embargo se puede evidenciar que el vehículo en cuestión con placas [REDACTED] es una motocicleta

¹¹ *Ibid.*

marca Italika, modelo 2014, siendo para cuestión de pago de refrendo anual **su tarifa mínima**, es decir, no existe otra cuota menor, de ahí lo infundado de su argumento.

En consecuencia, se **reconoce la validez** del refrendo anual de placas vehiculares de los ejercicios fiscales **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho, **2019** dos mil diecinueve, **2020** dos mil veinte y **2021** dos mil veintiuno, imputado al vehículo con placas de circulación [REDACTED]

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial consultable con el número de registro 172,578, Novena Época, página 1743, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de Mayo de 2007 que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variarían el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.”

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. [REDACTED] parte actora en el presente juicio, **desvirtuó parcialmente** la legalidad de los actos administrativos impugnados.■

SEGUNDO. Se **declara la nulidad de** la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], así como de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED] imputados al



vehículo con placas de circulación [REDACTED], por los motivos y razonamientos expuestos en el quinto considerando del cuerpo de la presente resolución.■

TERCERO. Se **reconoce** la **validez** del **refrendo anual** placas vehiculares para el ejercicio fiscal **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho, **2019** dos mil diecinueve, **2020** dos mil veinte y **2021** dos mil veintiuno, imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED] por los motivos y razonamientos expuestos en el sexto considerando del tronco de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así, lo resolvió el Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, ante la presencia del Secretario de la misma JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS, quien autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

EL SECRETARIO DE LA SALA

JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS

La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia definitiva de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2021 dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de nulidad Expediente III 44/2021, del índice de esta Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Doy fe.

JLGM/JGVC/jagm/occ.

"La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente".

